

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Martha Cecilia Bedoya Atehortúa
DEMANDADO	Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado 20 laboral del Circuito
RADICADO	05001 3105 020 2019 00198 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 253 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de sobreviviente muerte de afiliado, reclama compañera permanente – indemnización sustitutiva se reconoció con semanas no tenidas en cuenta para el otorgamiento de la prestación que se reclama
DECISIÓN	Confirma

Hoy, **quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Luz Patricia Quintero Calle, y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación al recurso de apelación interpuesto por la apoderada de **Colpensiones**, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de la misma, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito, dentro del proceso que promovió en su contra **Martha Cecilia Bedoya Atehortúa**. Radicado único nacional 05001 3105 **020 2019 00198** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto, estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº 029**, que se plasma a continuación:

Antecedentes

Pide la actora se condene a Colpensiones a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su compañero permanente, José Norberto Márquez González, a partir del 31 de julio de 2018. También solicita los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación y las costas del proceso.

Fundamenta su solicitud en el hecho de que Norberto Márquez falleció el 30 de julio de 2018, y que para esa fecha compartían lecho, techo y mesa, dado que iniciaron su vida marital el 18 de julio de 2009, la cual finalizó con su deceso. Alega que reclamó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes el 24 de agosto de 2018, negada en la Resolución SUB261156 del 03 de octubre de 2018, bajo el argumento de que Norberto recibió indemnización sustitutiva de la prestación por vejez a través del acto administrativo 023599 del 17 de diciembre de 2012. Sin embargo, sostiene que esta afirmación es incorrecta, ya que el causante continuó realizando aportes de manera ininterrumpida después de percibir dicho dinero, acumulando 145,46 semanas en los tres años anteriores a su deceso.

En el **auto del 12 de abril de 2019**, se admitió y dio trámite a la acción. Una vez notificada de la actuación, **Colpensiones** allegó pronunciamiento en el que reconoció la data de la muerte de Norberto, el contenido de la resolución que negó la pensión de sobrevivientes a la actora, y el hecho de haber efectuado aportes con posterioridad al otorgamiento de la indemnización sustitutiva. Los restantes supuestos no le constan. Se **opuso a la prosperidad de las pretensiones** y presentó excepciones para desestimarlas, denominadas: prescripción, compensación, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de sobrevivientes e intereses moratorios, buena fe, imposibilidad de condena en costas y la innominada.

La primera instancia **culminó con sentencia** proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito, en la que declaró que a Martha Cecilia Bedoya le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente, Norberto Márquez. En consecuencia, condenó a Colpensiones a cancelarle por concepto de retroactivo, causado entre el 30 de julio de 2018 y el 31 de octubre de 2023, el monto de \$63.322.112,00. A partir del 1º de noviembre de 2023, se seguirá otorgando una mesada equivalente al mínimo, en razón a 13 al año. Autorizó los descuentos a salud sobre el valor a pagar. Dispuso el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 24 de octubre de 2018 hasta que se salde la obligación. Absolvió de las demás pretensiones e impuso costas a la vencida.

El a quo respaldó su decisión señalando que la normativa aplicable al caso es la vigente en el momento del fallecimiento, específicamente el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Al tratarse de la reclamación de la compañera permanente, manifestó crucial demostrar, según la jurisprudencia especializada y constitucional, una comunidad de vida basada en lazos de amor, ayuda mutua, apoyo económico, asistencial, solidaridad y apoyo espiritual. Destacó la necesidad de que este vínculo sea real, efectivo y vigente en el momento del fallecimiento del asegurado para sustentar el derecho al pago de la prestación.

En consonancia con la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, señaló que, en el caso de afiliados fallecidos, no es necesario cumplir con una convivencia de cinco años antes del deceso del causante. Tras examinar el material probatorio, que incluyó documentos, interrogatorio de parte y testimonios, determinó que Marta Cecilia Bedoya y José Norberto Márquez cohabitaron efectivamente, con una comunidad de vida, durante nueve años antes del fallecimiento del causante. Además,

destacó que este último dejó causado el derecho al haber cotizado más de 50 semanas en los tres años anteriores a su deceso. La reclamación previa de José Norberto Márquez González para la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez no afectó el derecho de la actora, ya que, después de 2012, prosiguió con los aportes de manera continua, sin objeción alguna, validando así la pertenencia al sistema y contribuyendo con la financiación de las prestaciones por sobrevivencia.

Respaldó su conclusión citando sentencias de la Corte Suprema Sala de Casación Laboral, que establecieron que la concesión de la indemnización no afecta el derecho generado por el causante. Finalmente, dicho argumento le sirvió de base para imponer los intereses moratorios al constatarse la tardanza de la entidad en el reconocimiento de la prestación, determinado que correrían desde el 24 de octubre de 2018, dos meses después de la presentación de la solicitud, hasta que se paguen las mesadas adeudadas.

En desacuerdo, la apoderada de **la demandada apeló**, con el propósito de que se revoque la decisión. Su argumento se centra en la premisa de que el causante, no generó el derecho pensional. Sostiene que al solicitar el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva, Norberto emitió una declaración jurada indicando que no podría continuar cotizando, pues la única posibilidad sería que lo hiciera en uso de su capacidad laboral residual, supuesto que no se presenta. Sin embargo, según las manifestaciones de las partes y las respuestas durante el interrogatorio, el afiliado nunca dejó de trabajar, incluso permaneció con el mismo empleador, lo que sugiere una posible irregularidad en el sistema al reclamar la prestación subsidiaria de la pensión de vejez. Destaca que en la historia laboral de Norberto se consignó que ostentaba la calidad de afiliación con novedad de pensión, siendo el acto de vinculación único, por tal, no pudo volver a realizarlo después de obtener la indemnización.

Además, aduce que, al validar el sustento normativo establecido para obtener el derecho pensional, se puede determinar que el fallecido no dejó configurado el beneficio prestacional objeto de litigio, ya que no cumplió con la densidad de semanas en los últimos tres años, según lo reflejado en la historia laboral. También señala que no se acreditó la dependencia económica de la demandante respecto al causante, ya que esta admitió que siempre estuvo empleada, vivían en casa propia y recibían apoyo económico de su hija.

Colpensiones, en la oportunidad para **presentar alegaciones**, reitera sus argumentos del recurso de alzada. Enfatiza que no procede el reconocimiento de la pensión por diversas razones. Primero, al causante se le otorgó la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, habiendo declarado bajo juramento que no podía continuar realizando aportes, sin embargo, continuó haciéndolos con el mismo empleador, lo que podría implicar un eventual fraude al sistema. Segundo, no se acreditan las semanas de cotización en los tres años anteriores al fallecimiento, como lo exige la ley. Tercero, no se cumple con el requisito de dependencia económica, ya que el demandante afirmó en el interrogatorio de parte que siempre ha trabajado.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones:

Como hechos debidamente comprobados se tienen: Norberto Márquez González solicitó el 6 de agosto de 2012, el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva **de la pensión de vejez**, concedida con la Resolución GNR 023599 del 17 de diciembre del mismo año, en cuantía de \$5.070.462,00, para ello se consideraron las 344 semanas cotizadas entre el 19 de julio de 1984 y el 01 de enero de 2012 (Pdf 19 pág. 250 a 254). El

29 de agosto de 2013 requirió le fuera pagada la pensión de vejez, negada en acto administrativo GNR244986 del 02 de octubre de la misma anualidad, aduciéndose que no contaba con los requisitos establecidos en el Ley 797 de 2003 (Pdf 19 pág. 256 a 263). El 30 de julio de 2018, falleció el señor Norberto, y en razón a ello, el 24 de agosto del mismo año, la señora Cecilia Bedoya reclamó la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente, negada en Resolución SUB261156 del 03 de octubre siguiente, bajo el argumento de habersele entregado al señor Norberto la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez (Pdf 1 pág. 31 a 38 y Pdf 19 pág. 256 a 263). Según historia laboral, el señor Norberto tiene cotizaciones de manera continua con posterioridad al otorgamiento de la indemnización entre febrero de 2012 y 31 de julio de 2018 (Pdf 19 pág. 278 a 286).

En tales condiciones, teniendo en cuenta las inconformidades planteadas al sustentar la alzada y el grado jurisdiccional de consulta, el **problema jurídico** en esta instancia se centra en determinar si el señor Norberto Márquez dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, atendiendo a que le fue reconocida la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. De darse respuesta positiva, se analizará si la actora supera los requisitos legales y jurisprudenciales para que le sea concedida la prestación por sobrevivencia.

Pues bien, debe decirse que el caso debe analizarse bajo las condiciones particulares que lo rodean, esto es, que al señor Norberto en el 2012 se le reconoció indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, y para ello se tiene que el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, establece que serán afiliados al sistema en forma obligatoria, *"Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, salvo las excepciones previstas en esta Ley"*, y el 17 dispone la obligatoriedad de la cotización indicando que, *"Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de*

los afiliados y empleadores”, de manera que, a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993, no existe disposición que excluya la posibilidad de acceder al sistema a aquellas personas que lleguen a la edad mínima exigida para acceder a la pensión de vejez y, por tanto, su afiliación se predica válida, adicional a que el artículo 61 de la Ley 100 de 1993, prevé, sobre los excluidos: “b. Las personas que al entrar en vigencia el sistema tuvieran cincuenta y cinco (55) años o más de edad, si son hombres, o cincuenta (50) años o más de edad, si son mujeres, salvo que decidan cotizar por lo menos quinientas (500) semanas en el nuevo régimen, caso en el cual será obligatorio para el empleador efectuar los aportes correspondientes”, lo que aplica solo para el régimen de ahorro individual.

En concordancia con esto, en el caso del régimen de prima media con prestación definida, resulta evidente que, a partir de la Ley 100 de 1993, no existe ninguna disposición que prohíba el acceso al sistema para aquellas personas que alcancen la edad mínima requerida para obtener la pensión de vejez. Tampoco se exceptúan a aquellos que hayan recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez (véase la sentencia SL1075-2022, SL2991-2020, SL4698-2020), exceptuando eso si el otorgamiento de este último derecho, la protección de la misma contingencia, esto es la vejez, sin oponerse a que el afiliado permanezca asegurado en los riesgos de invalidez y muerte.

Sobre el particular en sentencia SL1644-2023, se rememora lo expuesto en la SL9769-2014, en el que la Corte indicó:

En torno al asunto en controversia viene adocctrinado por esta Corporación, que la circunstancia de recibir el afiliado la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, prevista en la L. 100/1993 art. 37, no impide que éste o sus derechohabientes se beneficien de una pensión distinta al riesgo de vejez, como sería el caso de la pensión de sobrevivientes que se causa por la muerte del asegurado, siempre y cuando se reúnan los requisitos legales exigidos para ese riesgo, por tratarse de diferentes contingencias.

[...]

De manera que de acuerdo con la regla jurisprudencial referida, incurrió el Tribunal en el yerro hermenéutico denunciado por la censura por cuanto la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez recibida en vida por el causante no implica, ipso jure, la renuncia por parte del asegurado o sus derechohabientes a reclamar una pensión por un riesgo distinto al de vejez, por constituir ésta una contingencia amparable diferente, pues la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en el presente caso sólo consolidó lo referente a ese riesgo.”
Resaltos fuera del texto)

Esta postura ha sido reiterada en las sentencias SL16169-2015, SL4064-2019, SL3868-2021, SL617-2023 y SL635-2023, entre otras, fundamentándose precisamente en la premisa de que las contingencias que respaldan la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y la pensión de sobrevivientes son distintas. En consecuencia, no hay impedimento para que los beneficiarios del causante puedan recibir esta última, incluso si en vida este hubiera percibido la primera prestación mencionada.

En la SL 3868-2021, se refutó que rechazar la contabilización de las semanas cotizadas después del reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez revelaría prejuicios respecto a la capacidad de los adultos mayores para llevar a cabo una actividad laboral. Además, implicaría limitar la cobertura para otras contingencias como invalidez o muerte, una posición que la jurisprudencia no respalda. Se expuso:

Y es que, para la Sala, aceptar esa supuesta incompatibilidad no dispuesta por ley (artículo 6°. del Decreto 1730 de 2001) con el fin de desconocer las validez de las semanas que un afiliado cotice con posterioridad al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, sería tanto como coartar la posibilidad que las personas en edad pensional puedan beneficiarse de oportunidades en un mundo del trabajo en continua evolución, a fin de reforzar estereotipos relativos a la incapacidad de los adultos mayores para ejercer cualquier actividad productiva dependiente o independiente.

Aunado, es de recordar que un verdadero sistema de seguridad social en pensiones permite obtener resultados concretos que inciden realmente en la vida de las personas dadas las diversas situaciones y necesidades propias y de sus potenciales beneficiarios; luego, el ideal de responder con eficacia a cada una de ellas impone, por parte de los administradores de justicia, la adopción de decisiones no solo respetuosas de la ley, también que resulten sostenibles y reconozcan la especial condición de contracción económica que genera el hecho

de arribar a cualquiera de las contingencias que aquel ampara –invalidez, vejez y muerte-.

Entonces, el Tribunal incurrió en el yerro jurídico denunciado por la recurrente por cuanto la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez recibida en vida por el causante no les resta validez o eficacia a las cotizaciones que, posteriormente, sufragó; máxime cuando, pese al reconocimiento de dicha prestación, el afiliado reanudó su pertenencia al grupo poblacional frente al cual, el sistema de seguridad social ofrece cobertura para los riesgos de invalidez y muerte.

Así las cosas, los aportes efectuados con posterioridad a la concesión de la indemnización deben ser contabilizados a fin de proteger a la persona y que la misma pueda acceder al reconocimiento de las pensiones que se determinan en la Ley, cuyo disfrute está sujeto precisamente al cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos, acreditar un número determinado de semanas en un lapso cercano a la ocurrencia del hecho generador de la invalidez o la muerte, es decir, 50 dentro de los 3 años anteriores al suceso, condición que, para el presente caso, está ampliamente satisfecha, ya que el señor Norberto aportó un total de 154 semanas entre el 30 de julio de 2018 y el mismo día y mes de 2015.

Así mismo, cabe destacar que, aunque el señor Norberto continuó realizando aportes con posterioridad al otorgamiento de la indemnización sustitutiva, incluso por la misma empleadora con la que venía efectuándolos previamente, la entidad de seguridad social no emprendió ninguna gestión para evitar dichos pagos. Continuó recibiendo estas contribuciones sin objeción alguna, lo que constituye un reconocimiento tácito de las mismas. En este sentido, la sentencia SL4698 de 2020 hace referencia a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral en la SL6066-2016, donde se ilustró:

[...] pues, tal como lo tiene adoctrinado esta Sala, cuando la entidad administradora de pensiones guarda silencio frente a deficiencias en la afiliación del trabajador y recibe las cotizaciones sin reproche alguno, tal como sucedió en el presente asunto, se configura una "aceptación tácita de la afiliación", tal como esta Sala lo sostuvo en las sentencias SL14236-2015 y CSJ SL, 19 jun. 2011, rad.

40531, de modo tal que la observación que tienen las semanas en comento no conduce a invalidarlas a efectos de obtener la prestación por invalidez.

Así las cosas, queda claro que para el caso no hay razón para que se niegue la prestación bajo este supuesto, por lo que se pasa analizar si a la señora Martha Cecilia le asiste derecho al pago de la pensión de sobrevivientes, debiéndose indicar que es posición actual de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que la norma aplicable es aquella vigente en la fecha del deceso del afiliado o pensionado. En este caso, al haber ocurrido la muerte del señor Norberto el 30 de julio de 2018, se aplica el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el cual modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, norma que establece:

*En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del **pensionado**, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; (resaltos fuera del texto)*

Y si bien a partir de la sentencia SL1730-2020 (**reemplazada con la SL4318-2021, en cumplimiento de la sentencia SU149-2021**), se ha presentado discordancia en cuanto a la interpretación y alcance del precepto frente al lapso de convivencia para el pensionado y el afiliado, insistiendo el órgano de cierre de esta especialidad que los cinco años solo se exigen cuando se está ante el deceso del primero, ver entre otras providencias SL5270-2021, SL973-2022, SL754-2022, SL273-2022, SL683-2023, SL714-2023, SL2163-2023 y SL2267-2023, aunque esta Sala de Decisión acoge el precedente especializado, para el caso este punto resulta irrelevante, como se verá más adelante.

Para definir la calidad de beneficiaria de la reclamante es primordial la acreditación del requisito de convivencia, como elemento material la

misma, y esta según la jurisprudencia especializada, entraña una comunidad de vida estable, permanente y firme, de mutua comprensión, apoyo espiritual y físico y un camino hacia un destino común, lo que excluye los encuentros pasajeros, casuales o esporádicos e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las condiciones necesarias de una comunidad de vida (ver Sentencias SL 2090 de 2020, SL 2488 de 2020, SL 4263 de 2019, SL 2792 de 2019); frente al contenido material en sentencia SL1576–2019, se expuso que «[...] la legislación y la jurisprudencia acogen el criterio material de convivencia efectiva como elemento fundamental para determinar quienes tienen la calidad de beneficiarios», basada en la demostración de «[...] muestras reales y efectivas de la continuación de la vida común», así como que este "forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real y afectiva durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado (CSJ SL, 14 jun. 2011. Rad. 31605).

Atendiendo dichos postulados, se tiene que en la investigación administrativa se concluyó:

"SI SE ACREDITÓ el contenido y la veracidad de la solicitud presentada por Martha Cecilia Bedoya Atehortúa, una vez analizadas y revisadas cada una de las pruebas aportadas en la presente investigación administrativa.

Ya que se corroboró que el señor José Norberto Márquez González y la señora Martha Cecilia Bedoya Atehortúa convivieron por 9 años en unión libre es decir desde el día 18 de julio de 2009 según declaración extra juicio, hasta el día 30 de julio de 2018 fecha en la que el causante falleció." (resaltos fuera del texto)

Dedución que se basó en la entrevista realizada a diversas personas. Así, **Julio Alfredo Echavarría García**, señaló que conoció la pareja durante aproximadamente 10 años, viviendo juntos en la misma casa sin separación hasta el día en que **falleció** Norberto. **Mauricio Acevedo**, declaró que la convivencia de la pareja duró unos 10 años en la residencia de la solicitante y hasta la fecha en que murió Norberto, supuesto que fue expuesto en

similar sentido por **María Nohelia y José Alfonso Márquez** hermanos del causante, así como por **Luz Mery Restrepo**, ex esposa del afiliado fallecido.

En el marco de este trámite, se recibieron también los testimonios de **María Nohelia Márquez de Patiño, José Alonso Márquez y Víctor Daniel Márquez González**, todos hermanos de Norberto. **De manera unánime, afirmaron que el afiliado y Martha Cecilia convivieron desde el año 2009 hasta la fecha en que Norberto murió** debido a una enfermedad que lo mantuvo en la clínica durante un mes y medio o dos. Durante este período, Martha Cecilia se dedicó a cuidar de él, incluso renunciando a su empleo. Aseguraron que la pareja nunca se separó, siempre estaban juntos y vivieron siempre en Robledo, en la casa de Martha. Argumentaron que eran una familia muy unida y que tanto Norberto como Martha los visitaban en sus hogares, al igual que ellos lo hacían.

En ese orden de ideas, concatenando los medios de convicción obrantes en el plenario, que abarcan evidencias documentales y testimoniales, y al evaluarlos a la luz de las reglas de la sana crítica establecidas en el artículo 61 del C. P. T. y de la S.S, **se puede afirmar que, según la apreciación de la Sala, la demandante y el señor Norberto mantuvieron una relación de convivencia estable y un compromiso espiritual constante en los años anteriores al fallecimiento, al menos desde mediados de 2009, esto es, por tiempo superior a 09 años, supuesto que incluso es reconocido por la demandada en la investigación administrativa**, y si bien no se desconoce que los deponentes tal y como se expresa en el recurso de apelación manifestaron que Martha trabajaba y que la pareja compartía los gastos del hogar, lo cierto es que esto no da al traste con la concesión del derecho, en tanto, la dependencia económica no constituye un para ostentar la condición de

beneficiaria pensional, como se desprende de la simple lectura de los literales a) y b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en la medida en que el presupuesto normativo que se debe cumplir es la convivencia, la existencia de una relación de vida estable, continua y sólida. Sobre el particular en sentencia SL5233-2021, se cita lo dicho en la SL4064-2019, en la que, sobre tal aspecto, señaló:

“Tampoco venían al caso las razones adicionales esgrimidas por el *ad quem* para avalar la decisión absolutoria de primera instancia, relacionadas con la ausencia de dependencia económica de la actora respecto del causante, pues **ninguna disposición legal exige que la cónyuge supérstite deba depender económicamente del causante para tener derecho a la pensión de sobrevivientes.**” Resaltos fuera del texto original. *(véase también la sentencia CSJ SL, del 22 nov. 2011, rad. 42792, reiterada en la CSJ SL6286-2017 y SL3521-2022)*

Por lo tanto, al cumplirse los requisitos para otorgar la prestación, se confirma en este aspecto, así como el disfrute desde el 30 de julio de 2018, considerando 13 pagos al año, al no haber operado la prescripción, de acuerdo con el artículo 151 del del CPT y de la SS. en concordancia con el 488 del CST, en tanto, véase como la prestación se solicitó el 24 de agosto de 2018, con negativa en acto administrativo SUB261156 del 03 de octubre de la misma anualidad, y la demanda se instauró el 27 de marzo de 2019. En cuanto al cálculo del retroactivo, realizado con base en el salario mínimo legal mensual vigente, se obtuvo una suma idéntica a la considerada por el a quo, por lo tanto, se confirma la decisión en este aspecto, así como en lo referente a la deducción de aportes a la salud de las mesadas ordinarias.

Finalmente, frente a la pretensión de pago de **intereses moratorios**, es importante destacar que en la sentencia SL2117-2022, donde se reitera lo expuesto en la SL3130-2020, la Corte preciso aspectos frente a este concepto, así: *i)* su naturaleza es resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su

interposición; *ii*) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y *iii*) existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando fluyan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de reglas jurisprudenciales. Así, el retardo o mora se erige en el único supuesto fáctico que desencadena los intereses moratorios, por lo que se causan desde el momento mismo en que ha ocurrido la tardanza en el cubrimiento de las pensiones.

En el asunto de marras, no se presentó ninguna razón objetiva ni justificación válida para negar la prestación, en tanto, la petición fue rechazada a pesar de que la investigación administrativa había concluido que la convivencia entre la demandante y el causante había tenido lugar durante nueve años y bajo el argumento de que al causante se le había otorgado una indemnización sustitutiva, manifestación que, como se explicó previamente, carece de validez, ya que las cotizaciones utilizadas para conceder el derecho a la pensión de sobrevivientes son posteriores y que no existe obstáculo para la reconocer la prestación cuando previamente se ha dado el desembolso de las contribuciones. Por lo tanto, es apropiada la imposición de intereses desde el 24 de octubre de 2018, dos meses después de presentada la reclamación, hasta la fecha efectiva del pago, teniendo en cuenta la tasa más alta de interés vigente para la época, tal como lo consideró el juez de instancia.

Costas en esta instancia a cargo de la recurrente, inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$2.320.000,00.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito, dentro del

proceso ordinario promovido por **Martha Cecilia Bedoya Atehortúa**, en contra de **Colpensiones**.

Costas en esta instancia a cargo del a recurrente, inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$2.320.000,00.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE